

Tormentas sexenales

Luis Hernández Navarro*

La disputa por Zapata ha cerrado un círculo en la política nacional. Las reformas de la actual administración, por más necesarias que parecieran haber sido, fueron impulsadas de manera vertical y autoritaria, y acabaron por crear un modelo de modernización excluyente. Por más que hayan querido arroparse con la imagen del caudillo del Sur han terminado generando un extendido malestar campesino. Y por más que hayan pretendido mostrarse como reformas campesinas, pocas, muy pocas fuerzas campesinas están de acuerdo con ello. Curiosamente, la oposición a estas reformas abrió un nuevo ciclo de luchas democratizadoras. Tal y como hace más de siete décadas sucedió con Zapata.

A pocos meses de que la administración de Carlos Salinas de Gortari termine, los mismos fantasmas que dieron señal de arranque a las protestas masivas contra su candidatura como candidato a la Presidencia de la República se han vuelto a hacer presentes. Efectivamente, si el malestar campesino que se precipitó en La Laguna durante 1988 en contra del futuro Jefe del Ejecutivo, obligándolo a pasar una de las noches más amargas de su campaña electoral en el ejido de Batopilas, evidenciaron las turbulencias que soplaban en el subsuelo del mundo rural y preparó el terreno para el ascenso electoral del cardenismo, hoy, a casi seis años de distancia, la protesta de los indígenas chiapanecos que se hicieron del control militar de San Cristóbal de las Casas y cuatro cabeceras municipales más en la madrugada del año nuevo de 1994, han evidenciado el profundo malestar que atraviesa al conjunto del país al tiempo que anuncian la más disputada sucesión presidencial del México contemporáneo.

El incendio del campo mexicano, del que la explosión chiapaneca es sólo una parte, ha provocado la peor crisis política del sexenio y ha terminado por opacar muchos de los resultados exitosos de la actual administración.

El hecho no puede dejar de ser significativo. Primero que todo, porque no deja de ser irónico el que la explosión rural en marcha que ha tomado la bandera de Zapata y el zapatismo como símbolo de su lucha, tenga lugar preci-

samente durante la administración que ha proclamado haber realizado la reforma campesina más profunda y que ha izado, una vez tras otra, la misma bandera de quienes hoy protestan: la de Zapata y el zapatismo. Segundo, porque muestra con toda claridad, que las reformas al agro impulsadas desde la administración pública pudieron circunstancialmente ser avaladas por las direcciones de algunas organizaciones campesinas nacionales o aprobadas incluso por el Poder Legislativo, pero estaban muy lejos de contar con el aval de los propios campesinos. Tercero, porque evidencia, con absoluta claridad, la enorme importancia que para la estabilidad política del país tiene la cuestión rural, a pesar del hecho de que allí se concentre poco más de la cuarta parte de la población económicamente activa. Cuarto, porque señala los riesgos implícitos de la vía de modernización vertical, autoritaria y excluyente aplicada por la actual administración, así como de los conflictos que surgen de pretender reformar la economía sin democratizar sustancialmente al país.

La pedrada en el parabrisas

El levantamiento campesino-indígena de Chiapas articulado en torno al EZLN despojó, de tajo, a la actual administración de las banderas del zapatismo con las que había buscado cubrir sus reformas. El EZLN creó en cuestión de días una nueva referencia político-ideológica en el conjunto de la nación pero de manera muy especial

* Asesor de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras.



FOTO: RAFAEL DEL VALLE CONTRERAS.

en el campo: las banderas de Zapata eran las que se asociaban con la continuación del reparto agrario y el fin del latifundismo, las que se imbricaban con la sobrevivencia digna de sociedad rural, y ello no tenía nada que ver con las reformas al 27 constitucional. La novedad estaba no en el discurso -levantado por muchas otras fuerzas rurales y urbanas- sino en que éste se acompañaba de un levantamiento armado y una insurrección campesina que alcanzó, rápidamente, una enorme legitimidad nacional.

Muy pronto quedó claro que el discurso del EZLN iba aún más lejos. Si durante muchos años, los neozapatistas habían actuado como una fuerza de autodefensa campesina contra los guardias blancos y los finqueros, decidieron constituir un ejército regular cuando las reformas salinistas al 27 constitucional cancelaron el reparto agrario. Es decir, que más allá de sus demandas de democracia política y autonomía para las comunidades indígenas, las reformas al 27 pasaron a ser parte central de su discurso.

En el terreno estatal la insurrección armada chiapaneca rompió un sistema regional de dominio en el que se expresaban de manera directa los intereses de los grandes propietarios de la tierra, los cacicazgos que controlan los circuitos comerciales agropecuarios y el transporte y, los funcionarios gubernamentales. Durante décadas, el gobierno federal sostuvo a esa oligarquía y acabó subordinando sus intenciones de prescindir de ella promoviendo

la modernización económica y política del estado a cambio de una aparente estabilidad, y la garantía de ser una enorme reserva electoral para el PRI. El levantamiento del EZLN y la movilización campesina que lo acompañó fueron como una "pedrada en un parabrisas", es decir, dañaron definitivamente el sistema de dominación e hicieron prácticamente imposible su reparación por "partes". O se cambia todo o se terminará de desbaratar más temprano que tarde.

La leña en la hoguera

Que la rebelión armada del EZLN y de una parte significativa de las comunidades indígenas de la Selva Lacandona y los Altos es sólo la punta del iceberg de la tormenta social chiapaneca quedó claro en las últimas semanas una vez establecido el cese de las acciones armadas. Las tomas de alcaldías y peticiones de destituir a cuando menos 21 presidentes municipales, las tomas de tierras por parte de grupos de campesinos -a menudo armados- pertenecientes a diversas organizaciones acompañadas de un intenso debate sobre la cuestión agraria en el estado, y, los centenares de demandas de proyectos de desarrollo presentadas a las instituciones gubernamentales son una evidencia de ello.

El profundo malestar social que reflejan estas acciones, impulsadas por organizaciones campesinas, frentes cívicos y partidos políticos, estaba presente en la sociedad chiapaneca desde antes del levantamiento militar del 10 de enero de 1994, pero no encontraba salidas. La insurrección armada actuó sobre ese malestar en un doble sentido: modificando la correlación de fuerzas para hacerla más favorable al campo de las organizaciones populares, y, funcionando como un catalizador de las iniciativas de lucha campesino-indígenas.

En ese contexto, las abiertas simpatías expresadas por la inmensa mayoría de las organizaciones campesinas chiapanecas que actúan fuera del área del conflicto hacia el EZLN, y que se manifiestan tanto en la exigencia de que se indemnice a las viudas y huérfanos de los caídos en la lucha como en las resoluciones explícitas del Consejo de Organizaciones Indígenas y Campesinas de Chiapas (CEOIC) en apoyo al zapatismo, no son resultado de manipulaciones de las organizaciones más radicales o de la prensa nacional sino un indicio más o menos fiel de la temperatura política en ese estado.

En la fase inmediatamente posterior al cese del fuego y hasta el momento del establecimiento de las pláticas entre el EZLN y el gobierno federal, la disputa política entre ambos se mantuvo dentro y fuera de Chiapas. Fuera del estado, los zapatistas parecieron apostar a generar no sólo una amplia corriente de opinión favorable a su causa sino también a construir un gran movimiento nacional por la independencia, la justicia y la democracia. El terreno principal de lucha serían los medios masivos de comunicación. El gobierno federal, por su parte, después de fracasar en la intentona de presentar a los insurrectos como una fuerza extranjera y no indígena, pareció enfilar su acción a mostrar al EZLN como una fuerza minoritaria y represiva dentro de su región al tiempo que busca aislarlo dentro y fuera de su área de operaciones.

En esta fase la disputa política fue evidente que los zapatistas lograron cuajar una amplia corriente de simpatías urbanas y rurales, aunque no hayan encontrado, por el momento, organicidad. Las opiniones de quienes juzgan que el conflicto ha sido inflado por los medios masivos de comunicación ocultan, por lo regular, un profundo malestar ante el éxito de la iniciativa zapatista en este terreno. Por su parte, la iniciativa gubernamental avanzó al promover desde las presidencias municipales la salida de la población no beligerante de las zonas de conflicto, y al buscar presentar ante la opinión pública ese éxodo como resultado de la intransigencia; empero, no pudo avanzar en aislar al EZLN de sus simpatías estatales y nacionales.

Dentro de Chiapas, además de procesar dentro de sus filas la necesidad de sentarse a la mesa de negociaciones (situación para la que evidentemente no se había preparado), el EZLN pareció dedicarse a estimular la lucha social y municipal, a amarrar una política de alianzas con diversas fuerzas, y, a consolidar su área de influencia

político-militar en disputa con las fuerzas sociales que operaban en la región (básicamente con la Aric-Unión de Uniones).

La estrategia gubernamental dentro de Chiapas fue, sin embargo, mucho más complicada. De entrada porque parecía existir a su interior dos diagnósticos de la problemática distintos: uno, veía el conflicto básicamente como un problema local surgido de la desatención social, el manejo inadecuado de la autoridad y la falta de eficacia de los aparatos de seguridad nacional, sobre los que se montó una fuerza político militar. Otro, percibía al conflicto como un problema surgido de la interrelación de diversas causas, en las que estarían factores agrarios, políticos y de procuración de la justicia, con imbricaciones nacionales. Las estrategias para enfrentarlo serían entonces diferentes, a pesar de que coincidían en puntos como la necesidad de buscar salidas de negociación política al conflicto, el requerimiento de mantener al Ejército Mexicano bajo el mando civil, o, el tolerar la existencia de una iniciativa campesina de oposición como vía para civilizar la lucha.

Quienes dentro de la estrategia gubernamental pusieron el acento en buscar el aislamiento de los zapatistas, pretendiendo paliar el malestar impulsando una derrama económica más o menos generalizada, controlando al CEOIC movilizándolo a la aplanadora cenecista y, minimizando la fuerza del EZLN metiendo en la negociación a otras fuerzas sociales que actuaban en la región, se enfrentaron ante el peligro de inflamar más el conflicto en lugar de crear las bases para su solución.

Cómo enfrentar el problema agrario pareció dividir a las autoridades. Así las cosas, mientras que para el Comisionado para la Paz la reforma agraria era una prioridad, y para el secretario técnico del Módulo de Atención a las Demandas Indígenas y Campesinas de los Altos no sólo hay tierra que repartir sino que existen latifundios de mil 500 has. en la entidad, el gobernador interino de la entidad ha sido muy parco ante el asunto de la tierra y prácticamente no ha hecho compromisos sobre posibles afectaciones a las propiedades privadas aunque tampoco ha procedido a desalojar a los invasores. Simultáneamente, los grandes ganaderos han pasado a la ofensiva, estatal y nacionalmente, poniendo por delante a auténticos pequeños propietarios y presentándose como víctimas, al tiempo que los campesinos han comenzado a tomar tierras.

La sublevación municipal se ha enfrentado, en lo esencial, a la intransigencia del gobierno estatal. Así, hasta el momento, a las peticiones de destitución de presidentes municipales se les ha respondido con promesas de investigación, espaldarazos del ejecutivo federal (véase la reunión del presidente Salinas con 13 alcaldes de los Altos de Chiapas, varios de ellos impugnados por los pobladores de sus municipios) y represión.

Pareciera ser que la estrategia gubernamental buscaba en ambos casos (el de la tierra y el de los conflictos

municipales) ganar tiempo y tratar de que la situación se enfriara.

La pedrada en el estanque

Como una piedra que al caer en el estanque produce ondas que se expanden a lo largo y ancho de éste, así, la insurrección chiapaneca ha producido ondas a lo largo de toda la sociedad mexicana. Estas ondas se han encontrado a su vez con otras ondas provocadas por otras pedradas: desde aquellas producidas por la lucha ciudadana por la democracia electoral, hasta aquellas provocadas por el malestar rural precipitado por las reformas del régimen. Sumadas todas, han producido una verdadera tormenta que amenazan con hacer naufragar al régimen de partido de Estado convertido en un pequeño barco de papel.

En el caso de la sociedad rural son tres las "ondas" principales que sacudían ya el escenario político nacional pero que el conflicto chiapaneco ha encrespado: la disputa por las carteras vencidas, el debate sobre el 27 Constitucional y la revaloración de las demandas étnicas. Otras más pequeñas en su extensión como la de exigir apoyos directos para los productores de café, se reanimaron y amplificaron también.

Los últimos tres meses de 1993 fueron escenario de un recrudecimiento del malestar rural. Enmarcado ya de lleno en el terreno de la sucesión presidencial, el descontento de los productores se expresó en dos problemáticas fundamentales: carteras vencidas y subsidios.

Aunque el descontento permeó prácticamente a todos los estratos de productores rurales, el mayor protagonismo en las protestas recayó en los grandes y medianos agricultores privados. Este protagonismo, expresado en acciones de masas, tomas de carreteras y movilización de maquinaria constituyó un fenómeno novedoso en el campo mexicano. El peso económico de este nuevo actor en la protesta -y el peligro de "contagio" hacia otros estratos- generó efectos políticos que trascendieron, con mucho, el impacto que estas medidas hubieran tenido si se considerara sólo la fuerza numérica de sus integrantes.

En los hechos, el movimiento por las carteras vencidas se convirtió en el punto donde se coagularon otros problemas que no habían encontrado canales de expresión adecuados: la falta de rentabilidad en el sector, una política de apertura comercial salvaje, un retiro del Estado que en ocasiones pareció desbandada, una situación de "balcanización" institucional, altas tasas de interés, un retiro drástico de subsidios, etc... Todos estos problemas hallaron una salida en la problemática de las carteras vencidas en la medida en la que en ellas se pone en riesgo el patrimonio sobre las unidades productivas.

Aunque el movimiento fue auspiciado de manera significativa por los grandes productores que habían concentrado el uso del crédito y que cuentan con otro tipo de bienes para sufragar sus pérdidas, participan en él tam-

bién pequeños y medianos productores privados a los que el Estado y las organizaciones campesinas tradicionales no ofrecieron salida alguna. La participación de los productores del sector social al movimiento fue frenada por la renegociación de la cartera vencida que se procesó en el marco de las reformas al 27 Constitucional.

En regiones como Chihuahua, el conflicto creció porque además de este problema se incrementaron significativamente las cuotas de la CFE. Amplias zonas del estado cuentan con riego por bombeo. El alto costo de las tarifas eléctricas calentó aún más el ambiente.

La propuesta ofrecida por Hacienda al movimiento de el *Barzón* en un primer momento fue insuficiente para frenar el movimiento en el corto plazo. Hacienda ofreció interceder con la Banca para parar los embargos de propiedades y, sobre la base de una negociación caso por caso, acordar reestructuraciones y quitas de intereses moratorios. Pero, ni se trató de un acuerdo firmado ni estaban claras las reglas sobre las que se negociaría cada caso. La represión que los dirigentes del movimiento sufrieron, lejos de desactivar el movimiento, lo mantuvieron vivo y politizado.

Finalmente fue hasta que el movimiento ofreció su solidaridad a los zapatistas y pidió la intermediación de Don Samuel Ruiz que se ofreció una salida parcial a sus demandas.

La disputa por los subsidios se hizo pública el 28 de marzo de este año, cuando la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sonora, tomó las calles con maquinaria y todo (más de dos mil agricultores). Dos grandes posiciones estuvieron presentes en él: aquellas que, básicamente desde el sector privado -y sobre todo del sector privado reconvertido a la producción maicera, en la medida en la que el precio de garantía les proporcionaba una renta superior a la producción de otros cultivos- planteaban la necesidad de otorgar subsidios a partir de criterios de productividad, y, aquellos que, sobre todo desde el sector social, planteaban la necesidad de otorgarlos a partir del número de hectáreas. La decisión final, otorgarlos por hectáreas dejó insatisfechos a los propietarios privados. Sin embargo, muy pronto se manifestará un doble malestar en el sector social: de un lado, el fin a los precios de garantía del maíz y el frijol afectará a una capa importante de productores. Por otro, el que los campesinos que se vieron obligados a rentar sus parcelas no reciban los recursos de Procampo precipitarán nuevas explosiones, sobre todo, en las zonas de riego.

El debate sobre las reformas del 27 Constitucional ha propiciado una reanimación de la oposición campesina. Si ésta había sido relativamente débil en el momento de su aprobación, ha crecido a lo largo de estos últimos dos meses y medio, estimuladas por la acción del EZLN. El mismo Congreso Agrario Permanente (CAP) señaló, en la boca de su coordinador en turno, que las 11 organizaciones campesinas que lo integran buscan que el Artículo 27 se revise para poner ciertos candados que, por ejemplo,

impidan a los bancos extranjeros ser poseedores de tierra ejidal (*La Jornada*, 18 de marzo de 1994).

Ciertamente, la respuesta gubernamental fue aquí enérgica. Muy rápidamente diversos funcionarios gubernamentales incluidos dos secretarios de Estado, y el dirigente nacional de la CNC salieron a defender las reformas. Lo mismo hicieron los representantes gremiales de los ganaderos, los propietarios privados y el presidente del Consejo Coordinador Empresarial. El presidente de la Confederación Nacional Ganadera destacó, en frase digna de ser recopilada por Carlos Monsiváis que "con las reformas hechas al Artículo 27, por primera vez en 500 años de lucha por la tierra se tiene la absoluta libertad para definir el destino de lo que quieren hacer en el campo los trabajadores mismos" (*El Nacional*, 14 de enero de 1994). Todos señalaron que las reformas eran necesarias y daban certidumbre. El mismo Salinas de Gortari, el 3 de marzo, declaró que el nuevo 27 era fiel a Zapata.

Pero, más allá de la apasionada defensa de las reformas, la administración de Salinas tuvo que realizar algunos ajustes en su propuesta. Los Compromisos por una Paz Digna en Chiapas mediante los cuales el gobierno federal dio respuesta a las demandas del EZLN reconocen que en Chiapas no se "realizó en plenitud el proceso de reforma agraria de la Revolución Mexicana". Allí mismo se plantea la necesidad de instrumentar una Ley de Justi-

cia Agraria del estado de Chiapas con tres ejes: fraccionamiento y enajenación de los latifundios; integración y protección del patrimonio familiar en las comunidades indígenas, y la integración del fondo de tierras para la atención de sus necesidades urgentes. Dígase lo que se diga, y aunque formalmente no se hayan realizado reformas a las reformas, la declaración oficial constituye un enorme golpe moral a la legitimidad de la iniciativa salinista.

La férrea defensa que el Jefe del Ejecutivo hizo de sus reformas han distado mucho de aparecer en la opinión pública como un triunfo. Todo lo contrario. La demanda de modificar el reformado 27 constitucional para que recupere su sentido original se ha extendido ampliamente y amenaza con convertirse en uno de los ejes centrales del debate político nacional. El próximo 10 de abril será un termómetro de la amplitud que esta demanda ha alcanzado.

El tercer elemento a destacarse es la profunda imbricación que sigue existiendo entre las demandas rurales y la cuestión étnica. A lo largo y ancho de todo el país, la recuperación de la etnicidad por parte de multitud de pueblos indios ha roto con una visión culturalista de la problemática impuesta desde el Estado y ha puesto en el centro del debate nacional la cuestión de la autonomía y el autogobierno. Miles de indígenas han comenzado a



FOTO: ARTURO G. CAMPOS/ÍCONOS.

movilizarse y a reunirse en torno a estas demandas y plantean la posibilidad de que, la anunciada reglamentación al Cuarto Constitucional se realice con una activa participación de los directamente interesados.

De Zapata a Zapata

En resumen, el largo trayecto que va de la noche de Batopilas a la madrugada de San Cristóbal muestra, más allá del debate sobre el futuro de las reformas al agro, la importancia de un elemento básico: el de la estrecha relación que existe entre las ondas producidas por el malestar rural nacida de una modernización excluyente, las ondas provocadas por las demandas de democracia plena y la estabilidad política. Las intentonas de modernizar el sector a "golpes de mercado", de drenar la población rural porque son incompatibles con un país moderno y un territorio con una importante población rural, de juzgar a la historia nacional como una coartada para impedir los cambios han mostrado que, tarde o temprano, provocan inestabilidad política. Cualquier política de modernización hacia el futuro debe partir de considerar que los campesinos existen y que pretender prescindir de ellos tendrá un enorme costo político y social. Aunque las presiones para avanzar a una democracia plena estaban ya presentes en amplios sectores sociales y políticos del país, la protesta campesino-indígena los amplificó y extendió. La modernización política nacional en marcha fue, en mucho, precipitada por el despertar de la sociedad rural en general y por la explosión chiapaneca en particular, es decir, surgido de abajo y de adentro. Fue un mentis para todos aquellos que esperaban que la democracia mexicana vendría de afuera y de arriba.

La disputa por Zapata ha cerrado un círculo en la política nacional. Las reformas de la actual administración, por más necesarias que parecieran haber sido, fueron impulsadas de manera vertical y autoritaria, y acabaron por crear un modelo de modernización excluyente. Por más que hayan querido arroparse con la imagen del caudillo del Sur han terminado generando un extendido malestar campesino. Y por más que hayan pretendido mostrarse como reformas campesinas, pocas, muy pocas fuerzas campesinas están de acuerdo con ello. Curiosamente, la oposición a estas reformas abrió un nuevo ciclo de luchas democratizadoras. Tal y como hace más de siete décadas sucedió con Zapata.

El temblor institucional

La sublevación chiapaneca cimbró profundamente las instituciones gubernamentales del país. De entrada, derribó al Secretario de Gobernación y obligó a una recomposición en el gabinete que favoreció a la línea negociadora sobre la línea dura. Puso además, en el centro de la arena política a Manuel Camacho Solís al designarlo como Alto Comisionado por la Paz. Si el fin de los

últimos tres sexenios se había visto oscurecido por el impacto de la crisis económica, el final de la administración salinista ha sido sacudida por la crisis política más importante de los últimos cincuenta años.

La explosión chiapaneca modificó de paso, el conjunto del espectro político nacional. Al interior de la Iglesia católica Monseñor Corripio desplazó de la interlocución al enviado vaticano y consentido gubernamental Gerónimo Prigione, y puso al hostigado Obispo de San Cristóbal en el centro de la negociación política del conflicto. En el mapa político nacional hay un corrimiento del PRD al centro y una revaloración de su apuesta legal y electoral. Socialmente se ha construido un amplio movimiento por la paz, que, en los hechos, se ha convertido en un movimiento antigubernamental.

El conflicto chiapaneco exacerbó también las contradicciones existentes dentro del bloque dominante. Estas, sin embargo, no pueden reducirse al enfrentamiento existente entre Prisauros y modernizadores salinistas sino que son mucho más amplias. La confrontación entre la familia Ortiz Mena-Salinas de Gortari fue particularmente cruenta a lo largo de los últimos seis meses de 1993 en el marco de la conmemoración de 25 años del movimiento estudiantil-popular de 1968. El enfrentamiento entre Salinas y López Portillo fue también severo a lo largo del año pasado, al punto de que el expresidente se definió a sí mismo como el último presidente revolucionario y Salinas tuvo que contraatacar en el marco de su informe presidencial. El enfrentamiento entre Colosio y Camacho alcanzó enorme notoriedad hasta el asesinato del candidato priista. Sin ir más lejos, detrás de los intentos por rearticular la campaña de Colosio, las distintas corrientes del partido del Estado que se alineaban con él protagonizaron una intensa pugna interna, que se tradujo tanto en las dificultades por repartirse las posiciones como en los obstáculos para desplegar la campaña misma.

Estas contradicciones expresan ciertamente diferencias de opinión sobre el proyecto de país al que se aspira, empero, evidencian también ambiciones de poder y ajustes de cuentas entre grupos.

La ola democratizadora alimentada por el conflicto chiapaneco precipitó una nueva reforma política que retomaba -a pesar de la oposición de algunos de los dirigentes del PRD- muchos de los planteamientos cardenistas. Simultáneamente abría espacios para una disidencia dentro de las filas del priismo encabezada por el Comisionado para la Paz, y opacaba la candidatura presidencial de Luis Donald Colosio. En ese marco, el candidato del PRI se vio obligado a radicalizar su discurso y moverse a posiciones de centro democrático.

Su asesinato congeló el proceso y precipitó al país a la zozobra y la incertidumbre. La ola se invirtió y ha dado paso a un proceso restaurador. La guerra se ha instalado dentro del mismo estado y amenaza con arrastrar al país todo. El conflicto en Chiapas ha quedado momentáneamente congelado esperando soluciones nacionales.